

XIX DELEGACIÓN ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN COLOMBIA

Informe de ISF Asturias, 2023



XIX DELEGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La decimonovena Delegación Asturiana ha estado conformada por:

- Cristina Fernández Alonso, de la Asamblea Moza d'Asturies.
- Francisco Javier Arjona Muñoz, de Soldepaz Pachakuti.
- Helena Plaza, de Comisiones Obreras Asturias.
- Javier Orozco Peñaranda, director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.
- Luis Escribano, de Burgos con Colombia
- Manuel Álvarez Martínez, del Movimiento Asturiano por la Paz.
- Mateo González Cid, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias.
- Minervino J. de la Rasilla Suárez, de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.
- Rafael Abelardo Palacios García, diputado y portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias.
- Rubén Fernández Gutiérrez, del Movimiento Asturiano por la Paz.

ÍNDICE

- Introducción
- Nariño
- Putumayo
- Huila
- Bogotá
- Conclusiones

INTRODUCCIÓN

La Delegación Asturiana lleva 19 años realizando visitas para la verificación de Derechos Humanos en Colombia, recorriendo distintas zonas del territorio. El objetivo es verificar y difundir el estado de los DDHH en el país, a través de audiencias con el pueblo colombiano y reuniones con diferentes organizaciones y sectores del Gobierno. Este año la visita se llevó a cabo entre el 12 y el 25 de febrero.

La visita de este año está marcada principalmente por el inicio del primer gobierno de izquierdas en 200 años, tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez (Colombia Humana) en las elecciones de mayo de 2022, y posterior toma de poder en agosto de este mismo año. Este hecho supuso un rayo de luz para el pueblo colombiano, un paso más para lograr una paz total y con garantías en todos los territorios del país. Pese a todo, la población es cauta, porque pese a las buenas intenciones del gobierno actual, reflejadas en las reformas tributaria, ya implementada, o de salud, de pensiones y laboral, propuestas, Petro y Francia tuvieron que hacer coalición con parte de la oposición, por lo que no puede ser considerado un gobierno enteramente de izquierdas.

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los primeros meses de calma fueron un espejismo de la situación en el país en los siguientes años: distintos grupos armados ilegales tomaron ventaja de la deposición de armas de las FARC para ocupar ilegalmente los territorios que este grupo controlaba anteriormente, y de esta manera seguir extorsionando a la población y violando los DDHH día a día. Para seguir avanzando hacia la paz total, el gobierno declaró el 31 de diciembre cese bilateral (fuerzas públicas y grupos armados ilegales) del fuego. Este cese no se está respetando por ninguna de ambas partes en algunos territorios, mientras que en otros lugares se habla de cese bilateral del fuego, pero no de hostilidades: continúan los desplazamientos forzados, confinamientos, feminicidios y otras formas de extorsión y violencia.

Como en años anteriores, la Delegación Asturiana se dividió en dos grupos: el grupo Sur, en el cual estuvimos representando a Ingeniería Sin Fronteras Asturias, tuvimos la oportunidad de visitar Nariño, Putumayo y el Sur del Huila; mientras que en el grupo Nororiental se centraron en los departamentos de Arauca y Casanare. Este informe está centrado principalmente en la situación de los DDHH en las regiones Sur pacífica y andino-amazónica de Colombia.

NARIÑO

Lideresas y líderes de la región Pacífico Sur, Tumaco

“Las mujeres somos el escudo de la guerra”.

El lunes madrugamos para viajar desde Bogotá a Tumaco, en un vuelo que se retrasa 5 horas debido a las condiciones meteorológicas del aeropuerto de Tumaco. Tras estar unas horas en el aeropuerto de Cali, sin casi ninguna información por parte de la compañía aérea Satena, partimos finalmente y aterrizamos en la costa del Pacífico Sur.

Una vez en tierra, nos desplazamos a la playa El Bajito, donde nos reunimos con diferentes lideresas y líderes de las comunidades afro e indígenas de la zona. Siendo Nariño, y especialmente la región Pacífico Sur, uno de los lugares con mayor apoyo a Petro y Francia (hasta un 95% en algunos municipios como Roberto Payán), la percepción es de abandono total por parte del gobierno. La guerra se está librando en las comunidades. Diferentes grupos armados ilegales están presentes en la zona, ejerciendo violencia y represión a diario sin obtener respuestas ni soluciones por parte de la alcaldía ni del gobierno. Además, la falta de oportunidades para la juventud, con un 90% de desempleo juvenil en Tumaco, termina en estas y estos jóvenes uniéndose a grupos armados ilegales a cambio de una paga mensual de unos 2 millones de COP (400 €).



Las alertas tempranas no se tienen en cuenta, y se producen desplazamientos masivos con alta frecuencia (5 o 6 por año). Tumaco no tiene instalaciones con las condiciones adecuadas para atender a ese número de población; ni voluntad por parte de la alcaldía, que está al servicio de los grupos armados. Se recalca de nuevo la importancia de la 3ª vuelta, las elecciones departamentales de octubre, para que haya un cambio de gobierno a nivel regional. Uno de los

principales objetivos es eliminar la corrupción y extorsión por parte de los grupos armados para condicionar los votos (tal y como sucedió en las anteriores elecciones regionales).

En el 60 o 70% de los territorios indígenas awá y eperara–siapidara hay minas antipersona que han provocado entre enero y febrero 26 personas afectadas en sus casas, colegio o fincas. Además, se denuncia el confinamiento forzado que están sufriendo sus pueblos, y se reclama apoyo para fortalecer sus organizaciones y autoridades, que hasta ahora no está teniendo apoyo del gobierno y están realizando con sus propios medios y fondos. Se exige al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez una atención inmediata frente al genocidio que está sufriendo el pueblo awá.

Existe una falta de enfoque de género en los gobiernos, los abusos sexuales en el marco del conflicto deberían haber sido incluidos como punto en la última firma del Acuerdo de Paz. Las mujeres pacifenses están sufriendo abusos y violaciones desde la niñez sin ningún tipo de apoyo institucional. Las lideresas son perseguidas y violadas. Las mamás son amenazadas y obligadas a entregar a sus hijas a los grupos armados, incluyendo menores de edad, que las secuestran y hacen desaparecer. Recientemente, una niña de 11 años fue secuestrada y asesinada con 33 puñaladas a cargo de los grupos armados. Se exige con carácter urgente que se tomen medidas de protección en el Pacífico Sur para velar por la seguridad de las mujeres del territorio.

El pacífico cuenta con una gran riqueza de recursos, que podrían servir como oportunidades económicas alternativas a la coca. Sin embargo, el plan de desarrollo del Pacífico no tiene en cuenta a sus gentes. Este lugar es utilizado para extraer los recursos sin respetar las pautas medioambientales ni generar economía dentro del territorio.

En resumen, hay más interés en la no–repetición de los hechos que en la reparación: las víctimas necesitan todo el apoyo posible para buscar a las personas desaparecidas y conocer sus derechos; además de recibir todo el apoyo institucional posible para combatir y denunciar la violencia en el territorio y dejar de velar por su vida en cada instante.

Orlando Fals Borda, Tumaco

“Hay cientos de cuerpos no identificados en los cementerios de Tumaco y Pasto”.

En la mañana del martes madrugamos antes de salir cara a Pasto para disfrutar de un desayuno típico pacifense, un “tapao de pescado”, acompañados por parte del equipo de Orlando Fals Borda (OFB). Esta organización, con 14 años de trayectoria, se dedica principalmente a la búsqueda de personas desaparecidas en diferentes regiones de Colombia, aunque también estén metidas en temas de fortaleza organizativa de las instituciones y organizaciones locales.

Nos trasladan que en los cementerios de Tumaco y Pasto hay cientos de muertos no identificados, que se están deteriorando con el tiempo dificultando así esta labor. Estos se corresponden con cuerpos de personas que fueron desaparecidas forzosamente, cuyos cuerpos fueron recuperados tiempo después. Además, debido a la falta de recursos, estos cuerpos son a menudo enterrados en fosas comunes o dejados directamente en sacos en algún lugar del cementerio. Las familias no aparecen a intentar identificarlos ya que en muchos casos son desapariciones de mucho tiempo atrás, o por falta de recursos o seguridad para ir al cementerio.

Partido Comunes, Pasto

“Bienvenidas al país de la maravilla, “aquí nunca pasa nada””.

Tras atravesar la Cordillera Central de los Andes para desplazarnos desde Tumaco a Pasto, somos recibidas por Leonel Pastaza en la sede del partido Comunes (antes más conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Allí nos reunimos con Diana Montilla, abogada defensora de DDHH en la reunión, además de con diferentes lideresas y líderes de la región. Lo primero que nos preguntan es sobre el viaje Tumaco – Pasto, ya que es considerado un tramo peligroso y con mucha presencia de grupos armados ilegales, por lo que hay antecedentes de desapariciones y conflictos armados en esa vía. Afortunadamente en nuestro caso fue un trayecto sin incidencias.



Comienzan hablando diferentes lideresas y líderes de las veredas de la región. Una de las principales problemáticas vuelve a ser la presencia de múltiples grupos armados en la zona, reportando hasta entre 12 y 14 grupos armados ilegales en la región. Se pueden escuchar testimonios como “cuando estaban las FARC había orden”, ya que, pese a que hubiese violencia, las negociaciones se hacían con un solo grupo armado, no con varios simultáneamente.

El caso de Alto Mira y Frontera es un reflejo de lo que está ocurriendo en más territorios de Nariño: hay enfrentamiento de los grupos armados en medio de la población civil, en el propio territorio, provocando graves conflictos, muertes y desplazamientos forzados; minas anti-personas en el terreno, a veces colocadas por drones, que impiden la libertad de movimiento por riesgo de pasar por encima de una; además esta vereda lleva un año en confinamiento, con los grupos ilegales controlando horarios de entrada y salida, y cobrando las remesas del campesinado en controles aleatorios en diferentes puntos, dejando así sin recursos a las personas habitantes del territorio.

Una mujer nos cuenta como su marido William Leonardo Castro Muñoz, que disponía de esquema de seguridad, lleva secuestrado 3 meses y sigue sin haber noticias ni atisbo de esperanza. Él es un líder reconocido de Nariño además de haber sido coordinador de la mesa de acompañamiento a víctimas. En Alto Mira, dos niños fueron asesinados en un enfrentamiento entre grupos armados el 1 de enero. Además, se produjo la primera

desaparición forzada por parte de las fuerzas públicas: un chico de 19 años desapareció en vereda Montañita después de un encuentro con la policía, esta negó tener nada que ver, y posteriormente apareció la motocicleta en el cuartel policial.

Precisamente en Nariño se produjo la masacre de El Tandil el 5 de octubre de 2017, que comenzó como una manifestación pacífica en contra de la erradicación forzada de los cultivos de coca por parte del campesinado, debido a que estos son el sustento para vivir de muchas familias de la zona. Esta terminó con 7 personas muertas y otras 22 heridas por disparos de la fuerza pública, que arremetió contra un campesinado completamente desarmado. 5 años después, las personas autoras del crimen siguen libres e impunes, sin juicio, por lo que se exige que sean juzgadas inmediatamente y se tomen las medidas oportunas para que no vuelvan a ejercer violencia.

Sigue habiendo un trato muy desigual entre hombres y mujeres. A la hora de evaluar el nivel de riesgo para establecer un esquema de seguridad, se infra-protege a las mujeres porque se considera que “no pueden hacer activismo”. El cuidado de las hijas e hijos recae sobre las mujeres, de tal manera que en muchos casos estas deciden dejar los esquemas de protección con las niñas, mientras ellas salen desprotegidas fuera del territorio. Además, debido a la falta de oportunidades, muchas mujeres se ven obligadas a prostituirse. Esto es el caso principalmente de mujeres venezolanas, que acaban siendo desaparecidas forzosamente.

Otra situación que se denuncia está relacionada con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Muchas de las personas integrantes de este cuerpo son ex-militares pensionadas, sin forma física y con mentalidad de ejército, por lo que no entienden la causa que están defendiendo. Además, como ya se comentó previamente, la evaluación de riesgo para poner esquema de protección se demora meses y generalmente se establece un nivel de riesgo menor al que la persona realmente está expuesta. Debido a ello, las medidas de seguridad son menores, como un botón de pánico o un teléfono de emergencia en zonas en las que no hay cobertura.

Desayuno con Nelly y Hernán Salas, Pasto

“Para entender la guerra, es necesario vivirla”.

El miércoles temprano nos reunimos para desayunar con Nelly Salas, experta en DDHH y afiliada al partido Comunes, y con su hermano Hernán Salas, activista en el departamento. Juntas están trabajando en un proyecto de escuelas de formación para guardias indígenas.

Tratamos el punto de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares destinados para que las y los firmantes del Acuerdo de Paz pudiesen reincorporarse a la sociedad en un espacio seguro y con garantías de poder generar oportunidades económicas. El problema es que estos espacios no disponen de las condiciones humanas mínimas para poder vivir ahí. Además, no se facilitaron las condiciones para poder realizar procesos productivos: ni a nivel de infraestructura; ni a nivel de educación ni formación, hacen falta capacitaciones y oportunidades de disfrutar de una educación básica y superior. El salario que reciben las y los firmantes ronda los 2 millones de COP (alrededor de 400 €), lo cual es insuficiente para empezar cualquier tipo de iniciativa económica. Todo esto se traduce en la vuelta de firmantes a grupos armados, en algunos casos por iniciativa propia, o en otros porque los grupos armados llaman a las firmantes para dar capacitaciones a la gente joven.

PUTUMAYO

Pueblo guzmanense, Puerto Guzmán

“A las pobres nos educan para ser gobernadas”.

Tras viajar el día anterior atravesando un paisaje primero andino y luego selvático por el corredor conocido como ‘El trampolín de la muerte’. Este “corredor” es la única vía que conecta las dos capitales departamentales, y es muy peligrosa por su estrechez y por el mal estado en el que se encuentra. Una vez superada la prueba, el jueves amanecemos para viajar a Puerto Guzmán y reunirnos con integrantes de diferentes veredas del municipio.

En Puerto Guzmán comenzamos recibiendo buenas noticias, el evento cuenta con el apoyo y financiación total del alcalde, mostrando así su apoyo a la lucha contra los grupos violentos. El mismo alcalde contaría más tarde que no está pudiendo llegar a su finca por amenazas de muerte de los grupos armados. Otro hecho resaltable es la presencia de la guardia indígena y guardia campesina en el mismo espacio, hecho que no es tan común como debería, pero que visibiliza que el trabajo en equipo y conciliación entre campesinado y población indígena fortalece la lucha social de los territorios.

Un firmante interviene haciendo un repaso del acuerdo de paz punto por punto, visibilizando como no se está cumpliendo ninguno en el Putumayo: no se está realizando la reforma rural integral ni se están restituyendo suficientes tierras; múltiples lideresas y líderes políticos, además de firmantes, están siendo asesinados; no se consiguió ningún pedazo de tierra para comenzar procesos productivos en los ETCR; y no hay apoyo del gobierno para la sustitución de los cultivos ilícitos. Además, vuelve a denunciarse la deplorable situación de los ETCR, que no disponen de las condiciones mínimas para vivir. Además, muchas personas firmantes se están viendo desplazadas forzosamente por amenazas recibidas por parte de los grupos ilegales.

El 28 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre grupos armados, Frente Carolina Ramírez y Frente Comandos de Frontera, que se saldó con más de 21 muertes, además de decenas de familias desplazadas en corregimiento Jose María. La tarea de levantar y mover los cuerpos recayó sobre la comunidad por orden del alcalde, hecho que fue filmado, recibiendo así una repercusión mediática muy negativa y represión por parte de los mismos grupos armados. Además, la comunidad habla de más de 40 cuerpos, pero las fuerzas públicas no permiten la entrada al lugar, siendo cómplices de esta manera del suceso violento. Por este motivo, se muestra el rechazo hacia las fuerzas públicas, incluyendo policía, ejército y también alcaldías, relacionadas y asociadas con el narcotráfico; y se aboga en favor de los organismos locales con enfoque del territorio, tales como las guardias indígenas y campesina.

En resumen, pese al cese bilateral al fuego, se están silenciando muchas muertes, las amenazas continúan y hay comunidades secuestradas. A pesar de las adversidades, el pueblo guzmanense resiste y sigue luchando.



Docentes del Putumayo, Villagarzón

“Las docentes llevamos una lápida en la espalda”.

La mañana del viernes fue aprovechada para reunirnos con algunas docentes del departamento, que nos trasladaron la peligrosa situación que viven las docentes día a día, además de mucha preocupación por el sistema educativo actual.

En la mayor parte del río Caquetá y del río Putumayo hay docentes amenazadas, que se ven obligadas a desplazarse del territorio, lo que provoca que se paren o ralenticen las clases. A los grupos armados no les interesa que la juventud se eduque en torno a la paz y al empoderamiento del territorio, ya que perjudican sus intereses y les impiden seguir captando gente joven en sus filas. Por lo tanto, se aprovechan de los paros escolares fruto de las amenazas a las docentes para ofrecer dinero a la juventud, que sin oportunidades educativas acaba uniéndose a un grupo armado. En 2022 hubo un total de 22 docentes amenazadas, y los dos meses que van de 2023 ya hay hasta 52 docentes amenazadas. La secretaria de educación obliga a las docentes a volver a sus territorios, o las reubican en lugares que también están en conflicto, re-victimizando así a las profesoras. No se da un trato diferencial a las docentes amenazadas, ni tienen ningún tipo de acompañamiento psico-emocional. Una profesora desplazada interviene para denunciar que su hija estaba secuestrada, y que no hay respuesta por parte de ninguna institución ni de la comisaría, que se vuelven cómplices en este caso de la violencia. Mientras tanto, la secretaria de educación la presiona para volver a su territorio, poniendo así su vida en riesgo.

Las docentes trasladan que el sistema educativo actual en Colombia pretende imitar al de Occidente, brindando una educación basada en el individualismo y la competencia, completamente desconectada de la Madre Tierra. Se recalca la necesidad de promover una educación centrada en las emociones, en juegos y en el trabajo en comunidad, en lugar de seguir enseñando el descubrimiento de América. Este nuevo modelo pondría en el centro la conexión y empoderamiento de la niñez con el territorio, aprendiendo a entenderlo, cuidarlo y respetarlo desde que somos pequeñas. Por otro lado, no hay universidad en el Putumayo, lo cual es negativo para la formación de valores de paz.

Otro tema muy sensible es la situación del relleno sanitario de la vereda Medio Afán. Este se ha convertido en un “botadero de basura a cielo abierto”, que no cumple con las condiciones

sanitarias, provocando enfermedades entre los colectivos más vulnerables. La cuenca del río Mocoa se convirtió en un vertedero de aguas residuales de otros lugares.



La minería presente en el departamento está sobre-explotando la zona, a costa de un gran impacto medioambiental y desastres como el ocurrido en la avalancha de Mocoa, que dejó alrededor de 300 muertos según el Estado, aunque más de 1000 según los aportes de la comunidad. La empresa canadiense Liberocobre recibió una concesión en el Alto Mocoa, pese a la oposición del pueblo; y, aparte de los impactos negativos comentados anteriormente, solo asegura 200 empleos, de los cuales solo están reservados un 10% a gente del territorio. Está también proyectada la vía Mocoa – San Francisco, que pretende ser una alternativa al “Trampolín de la muerte”. Sin embargo, el pueblo clama que esta vía está destinada a ser un carril de transporte rápido de materiales mineros entre Nariño y Putumayo, no a favorecer las necesidades de la comunidad.

Villagarzón fue también centro del estallido social de 2021. El 29 de mayo de 2021 fue asesinado un joven integrante del pueblo nasa, Jordany Rosero, a cargo de la policía anti-narcóticos. Este cuerpo estaba sumiendo el rol del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) en ausencia de este, ensañándose y humillando al pueblo con frases como “solo matamos a uno porque nos están viendo”. Los hechos se dieron cerca del pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, cuando se reclamaba cumplir compromiso de cierre de la empresa.

Las mujeres son consideradas “botín de guerra”, siendo víctimas de abusos sexuales por parte de grupos armados y del ejército. También, debido al trabajo en las minas, son más propensas a infecciones urinarias y problemas en el aparato reproductivo. Además, mujeres jóvenes y niñas sufren explotación sexual en las zonas con pozos petroleros. Estos actos siguen impunes y las mujeres siguen estando expuestas a violencias de género día tras día, sin ningún tipo de garantía de protección por parte de las distintas instituciones.

Finalmente, se reitera la idea de que el Estado debe consensuar las medidas de seguridad con el territorio, incluyendo en las conversaciones a representantes del pueblo putumayense.

Autoridades indígenas del pueblo nasa, Resguardo Nasa de Aguaditas

“Si seguimos así, en 4 años nos quedaremos sin agua”.

En la misma tarde del viernes somos invitadas a reunirnos con lideresas y líderes indígenas de varios resguardos indígenas del pueblo nasa en el municipio de Puerto Guzmán. Para ello nos desplazamos al resguardo de Aguaditas, donde tenemos la oportunidad de charlar en su territorio.

La llegada de hasta cuatro diferentes empresas petroleras a la zona está trayendo consigo más grupos armados y más violencia a la zona. Esto provoca un aumento de los confinamientos y de los cultivos de coca para usos ilícitos. Además, está incrementando la contaminación de los recursos hídricos debido a estas petroleras y a las empresas mineras presentes en la zona. El agua no es potable, y se ve contaminada por materiales como el mercurio. Se habla de la pérdida de autonomía del territorio, que pasa al control de los grupos armados (se han perdido hasta 100 hectáreas en alguna comunidad), lo cual beneficia la economía del gobierno y empeora la suya: no tienen condiciones para sembrar, y el calentamiento global está teniendo impactos muy negativos en la zona.



Preocupa mucho no tener actualmente representación nacional. Además, se exige que se incluyan delegadas y delegados de los pueblos indígenas para la negociación de los Acuerdos de Paz, hecho que nunca llegó a ocurrir durante las negociaciones anteriores.

El punto 4 del Acuerdo de Paz habla de la sustitución de los cultivos ilícitos de coca. Sin embargo, la coca es una planta sagrada para los pueblos indígenas, que no pretenden lucrarse con ella sino aprovecharse de sus beneficios. El pueblo clama que estos cultivos no son ilícitos, son nativos, ilícito es lo que hace el gobierno.

Posteriormente, nos reunimos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), presente también en el resguardo impartiendo unas capacitaciones en defensa personal a la guardia indígena nasa. El CRIC niega que se esté respetando el alto al fuego del 31 de diciembre y denuncia que la violencia continúa. La semana anterior fue secuestrado y permanece desaparecido un comunero. El pasado año 2022 se produjo el asesinato de 15 kiwe thegnas y un joven ambientalista. Además, ha habido un incremento de los cultivos ilícitos de un 200%.

Autoridades y organizaciones del Putumayo, Villagarzón

“El pueblo está poniendo el pecho en primera instancia”.

El objetivo de la reunión es dar una visión a nivel departamental sobre la situación de los DDHH en el Putumayo, desde el punto de vista de cada organización o alcaldía.

La Unidad para las Víctimas interviene diciendo que se puede considerar a un 42% de la población del Putumayo víctima, es decir, alrededor de 154.880 víctimas. De estas, 143.339 personas fueron desplazadas forzosamente desde el inicio de los conflictos, y más en concreto 2.666 fueron el número de personas que ingresaron al proceso de víctimas en 2022. Los desplazamientos se pueden llegar a producir a otro departamento, o incluso a Ecuador. Finalmente, en el momento de la interlocución hay 10 alertas tempranas, indicador de que hay zonas que están en peligro inminente.

El enlace de la UNP en el Putumayo dice que de 15 pueblos indígenas, 9 cuentan con medidas de seguridad colectivas con enfoque étnico; también dice que hay 398 solicitudes de protección pendientes. La policía menciona un sistema habilitado para que la población mande quejas mensuales; por otro lado niegan haber recibido instrucciones específicas tras el anuncio del cese al fuego, cuando en realidad si tienen unas pautas, lo que refleja la mala comunicación interna en el cuerpo policial. El ejército declara que si están respetando el cese bilateral al fuego, pero no los grupos armados y declara que “el ejército también es una víctima en este conflicto”.

También interviene la alcaldía de San Miguel, frontera con Ecuador, para denunciar la deforestación que está sufriendo la zona, afectando a la fauna y a los recursos hídricos. Además, expresan las diferencias a nivel de desarrollo entre Ecuador y este municipio, ya que en el país vecino tienen una mejor educación y vías de tránsito en mejor estado.

Por último, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constata que están habiendo desplazamientos forzados masivos (más de 10 familias) que no están siendo registrados por temor a denunciar, por falta de confianza en las instituciones. Además, inciden en la necesidad de trabajar con personas refugiadas venezolanas, que terminan trabajando en cultivos ilícitos por falta de oportunidades laborales. La representación presente de la Drug Enforcement Administration (DEA), en concreto del departamento de acompañamiento al Acuerdo de Paz desde los Estados Unidos, indica que es muy importante fortalecer el ámbito educativo, pero que tiene que ir acompañado de oportunidades laborales, ya que ahora mismo las únicas oportunidades son en administraciones públicas. Esto provoca que haya gente joven de la universidad, que al mismo tiempo está militando en grupos armados. De nuevo se recalca que si ha habido en cierto modo un cese bilateral de fuego, pero no de hostilidades (violaciones, desplazamientos forzados, confinamientos, etc.).



HUILA

Personas desplazadas al Huila, Pitalito

“Prefiero que me lleven tabaco a la cárcel que flores al cementerio”.

Esta audiencia está caracterizada por la amplia presencia de personas desplazadas desde otros departamentos (Nariño, Putumayo, Cauca, Tolima), algunas desde hace meses, otras desde hace hasta 30 años. Se decide denominar al espacio “círculo de la palabra”, lo cual termina generando la mañana más emocional de todo el viaje, debido a la gran disposición y apertura de corazón de la gente, abriendo así viejas heridas sin cicatrizar.



Pese a ser Pitalito lugar de recepción de la “humanidad huyente” de la guerra, centro de reubicación de víctimas, la mayor parte del Huila no ha sido considerado por el Estado como territorio afectado por la violencia. Este lugar es “puerto seco” para el narcotráfico, es decir, la cocaína no está circulando libremente. Esto está originando mucha violencia callejera y mucha gente viviendo en la calle, sin recursos.

Muchas víctimas relatan como fueron desplazadas forzosamente de su territorio, en muchos casos sin previo aviso: “desalojen la casa en una hora si quieren preservar la vida”. Estas personas se vieron en la calle y sin recursos, obteniendo ayuda nula o muy pobre por parte del Estado y las organizaciones pertinentes. Se habla de indemnizaciones muy bajas, de 2 o 3 millones de COP (entre 400 y 600 €), insuficientes para empezar una vida prácticamente desde cero. La tramitología a realizar actúa como barrera para que las personas puedan denunciar violaciones de los DDHH e iniciar procesos de reconstrucción personal y colectiva, siendo así re-victimizadas durante años. Además, las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de los desplazamientos no reciben ayuda ni acompañamiento por parte del Estado.

Además, al igual que ocurre en el Putumayo, existe una problemática con la minería en el Sur del Huila. La gente que se opone a la minería no tiene garantías de seguridad de ningún tipo y sufren represiones y amenazas por su posicionamiento. El 27 de julio de 2022, quemaron la casa del líder social Pedro Nel Jiménez Sterling por defender su territorio y posicionarse en contra de la minería y de proyectos extractivistas en esta región. Pese a tener más antecedentes de atentados contra su persona, la UNP decidió que su nivel de riesgo no es suficiente alto como para asignarle un esquema de seguridad.

Se exige que el departamento del Huila sea considerado como víctima del conflicto armado, y así de esta manera se agilicen procesos de denuncias de violaciones de DDHH y se mejore el acceso a indemnizaciones, y a una sanidad y educación de calidad.

BOGOTÁ

Cárcel La Picota

“Las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad”.

Ya de vuelta en Bogotá y reunida la delegación al completo, nos comunican que han aceptado la solicitud de visita a los presos políticos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la cárcel masculina de mediana seguridad La Picota, acompañadas del Comité de Defensa de Presos Políticos. Pese a madrugar para llegar puntuales a la cita y disponer del máximo tiempo posible dentro, no nos lo ponen fácil: nos vemos esperando en la entrada al lugar aproximadamente 3 horas entre papeleo, controles, etc., lo que nos redujo el tiempo dentro del lugar a 1 hora escasa.

Lo primero que vemos al entrar es un cadáver tapado con un plástico situado en un lugar bastante visible y que no favorece las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar. Charlando con algunas personas que rondan la zona, nos cuentan que hay un problema grave de salud en la cárcel (hay un brote de tuberculosis) y que la comida es escasa e insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias diarias mínimas.

Pasamos a la escuela de la cárcel, y nos reunimos dentro de una clase con los presos políticos del ELN. Nos recalcan la grave situación alimentaria, lo que provocó que se estén dando huelgas de hambre en las cárceles de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí. Respecto al sector sanitario, no hay una atención suficiente ni se disponen de suficientes medicamentos. Esto ha provocado que haya 7 eilenos en situación de salud muy grave, y a los cuales se exige la libertad inmediata para “ir a morir con su familia”. Además, hay otros 40 en situación muy delicada de salud.

La guardia de la prisión no ejerce su trabajo, sino que son corruptos, dejándole el control de los pabellones a algún interno a cambio de plata, droga u otros bienes. Estas personas reclusas que tienen el control procuran que siempre abunde la droga en los pabellones para mantener el control sobre el resto de la gente. Además, en los pabellones conviven paramilitares y guerrilleros (siendo estos la clara minoría), en palabras textuales de una de las personas presentes: “estamos viviendo con el enemigo”. Pese a que con el gobierno de Petro y Francia se estén facilitando algo más los espacios, siguen sin poder conformarse mesas de paz en el interior de las prisiones.

Por otro lado, el Comité de Defensa de Presos Políticos señala que los tratos en las cárceles de mujeres son incluso peores. La principal vía de denuncia son las visitas familiares, las cuales las mujeres reciben menos por estar en cárceles más descentralizadas, entre otros motivos.

Partido Comunes

“El gobierno de Santos no estaba preparado para el Acuerdo de Paz”.

Tenemos la oportunidad de charlar en la sede de Comunes, antes más conocido como FARC, con César Rodrigo (responsable de relaciones exteriores) y con Olga Lucía (responsable de género y diversidades del partido). Olga comenta que con este gobierno se creó al fin un Ministerio de Igualdad, y que Francia Márquez afirmó que este era un gobierno “por y para las mujeres”. Comunes piensa que Petro y Francia tienen buenas intenciones y muestra su apoyo,

pero de nuevo se recalca que va a ser muy importante la 3ª vuelta, el período de elecciones departamentales de octubre.



Afirman que Duque simulaba ante la comunidad internacional, pero que su objetivo era destruir el proceso de paz iniciado por Santos. Con Santos era asesinado una persona firmante de paz cada 7.8 días, con Duque cada 5, y con Petro y Francia cada 12, por el momento. Hay 187 presas y presos políticos de las FARC, y alrededor de 200 más en proceso de reconocimiento para comprobar si eran militantes. Finalmente, Comunes recalca que están en un proceso de limpieza de imagen, para lo cual están haciendo audiencias públicas con personas víctimas de las propias FARC.

ONU

“Ha habido un cambio radical con el nuevo gobierno respecto a la narrativa de los sucesos violentos”.

La Organización de las Naciones Unidas nos transmite que 2022 fue el año más violento desde 2012, con 256 homicidios a defensoras y defensores de derechos humanos. Fue el año más regular en violencia, con un 44% de ataques a representantes de juntas de acción comunal, además de a grupos indígenas (especialmente awá y nasa), campesinado y personas defensoras de la tierra. En el 77% de los casos la violencia es perpetrada por grupos armados no estatales.

El departamento más violento fue el Cauca, donde se produjeron 11 de los 19 asesinatos a la guardia indígena. Luego seguirían el Putumayo y Nariño como lugares con mayores conflictos. Además, en todo el país hay 160 municipios con nivel de riesgo alto. Por último, se señala el problema actual que tienen las defensoras y defensores de derechos humanos para obtener un esquema de seguridad, solo se aprueban un 25% de las solicitudes y en caso de obtenerlo hay un problema de enfoque a la hora de evaluar las medidas.

Unidad de Restitución de Tierras

“Queremos que Colombia se constituya en potencia mundial para la vida”.

El objetivo de esta institución es devolverle tierras a las personas que fueron o se vieron obligadas a irse de su territorio fruto de la violencia y conflictos armados presentes en la zona. Para ello estas personas víctima pueden hacer una solicitud a esta organización, pero la situación es compleja: en muchos casos las víctimas solicitan la restitución de tierras en otro territorio, ya que el suyo sigue en conflicto y no se pueden garantizar medidas de seguridad (esto es el caso de Arauca, por ejemplo); en otros casos estas tierras son ahora territorio sagrado indígena; y también se producen varias solicitudes de un mismo territorio, debido a que hubo diferentes personas que fueron desplazadas de un mismo pedazo de tierra en diferentes momentos, debido a la presencia intermitente de conflictos violentos en la zona.

Ahora mismo, esta organización se está focalizando en dos grupos: víctimas que residen en el exterior del país, a las cuales se anima a hacer la solicitud ya que no implica necesariamente el retorno al país y podría ser beneficioso para sus familias; y para las y los adultos mayores, para los cuales también se deniegan la mayoría de las solicitudes por no completar el proceso de restitución.



Sintrapaz, Vía Campesina y Fensuagro

“El movimiento social debe mantener su autonomía del gobierno”.

Tuvimos la oportunidad de tener diferentes reuniones con diferentes grupos y organizaciones campesinas, para poder analizar la situación del pueblo campesino en el último año y tras el cambio de gobierno.

Vía Campesina nos habla de que con Petro y Francia, por fin se reconoció al campesinado como sujeto de derecho. Además, recalcan la importancia de la movilización del 2 y 3 de diciembre en Bogotá, donde se reunieron más de 4000 campesinas. Además, es destacable el aumento de diversidad campesina en los últimos tiempos, con un incremento de la población LGTBIQ+.

La reunión con Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) está marcada por la gran presencia de jóvenes estudiantes de la universidad, principalmente de trabajo social. Se destaca el incremento del liderazgo femenino en el campo, y de los proyectos que se están realizando en las universidades, como huertas urbanas; además de que se está comenzando a

hablar de universidades rurales. Nos hablan también de la estigmatización que esta sufriendo Fensuagro en redes sociales, donde se le relaciona con el ELN y disidencias de las FARC.



También tuvimos la oportunidad de compartir un espacio con algunas compañeras del Sindicato Agrario de Sumapaz (Sintrapaz), territorio recientemente nombrado como Zona de Reserva Campesina (ZRC). Destacan que antes del gobierno de Petro y Francia habían 7 ZRCs, y desde la toma del poder ya van 4 más. Esto supone un logro político muy grande, impulsando el ideal de que la tierra tiene que cumplir una función social. Sin embargo, la presencia de dos bases militares en la zona, imponiendo su jerarquía e invadiendo propiedades privadas siguen provocando que la zona no sea segura. El paramilitarismo tiene presencia alrededor de la zona, pero todavía no ha logrado entrar. Finalmente, dentro de los retos actuales están: reconstruir el tejido social roto por la guerra; mejorar las condiciones de seguridad y sanitarias (no hay hospital de alto nivel en la zona); y aumentar la ZRC al máximo terreno posible de la provincia, ya que ahora mismo la zona solo abarca una parte de Sumapaz.

Ministerio de Interior

“Las vacas narcotraficantes llevan leche en polvo”.

En el Ministerio de Interior, nos recibe un viejo conocido de la delegación, Franklin Castañeda, actual responsable de DDHH del gobierno. Franklin destaca el aumento de asesinatos entre octubre y noviembre, debido a que en esa época fueron las elecciones de las representantes de las juntas comunales. En estos casos los grupos ilícitos imponen normas y ejercen extorsión para condicionar quien sale elegido, además de forzar la toma de decisiones según sus intereses. Por otro lado, se habla también de la reforma policial propuesta, en la que se habla de trasladar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior o al de Justicia. Finalmente, Franklin incide en que el cambio económico al que se está sometiendo el país con el nuevo gobierno no va a ser pacífico, y que es un cambio que no cuenta con el apoyo de las fuerzas públicas.



Organización Nacional Indígena de Colombia

“2022 ha sido el año más violento desde la firma de los acuerdos”.

El último día de esta verificación en Colombia transcurre, al igual que el año pasado, en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), donde tenemos la oportunidad de reunirnos con el Consejero Mayor de la ONIC y con el equipo de apoyo (secretaría, consejería, etc.).

La ONIC se muestra algo decepcionada con el proceso de restitución de tierras, no se sienten avances reales y hay más de 900 procesos de restitución abiertos. En términos de violencia, 2022 fue el año más violento para los pueblos indígenas desde la firma: de 6.831 víctimas en 2017 a más de 400.000 en 2022. Siendo las principales vías de violencia el confinamiento, desplazamiento forzado y hostigamiento. Por otro lado, preocupa la situación del pueblo sikuani en el departamento de Meta, que está en disputa del territorio con las empresas petroleras. El Estado entró a mediar en ese conflicto, dejando dirigentes, mujeres y niñas y niños encarcelados o muertos.

Lanzar comunicados públicos es complicado por miedo a represión, amenazas, etc. Cuando la ONIC denuncia, los grupos armados ejercen represión en el territorio. Finalmente se denuncia la cantidad de indígenas que viven en las calles de Bogotá, y pese a que la alcaldía tenga un plan en marcha existe una desarticulación debido a la falta de comunicación con la ONIC.



Otras reuniones

Además, también tuvimos la oportunidad de reunirnos con otras organizaciones con el Ministerio de Exteriores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o el periódico Voz.

CONCLUSIONES

2022 fue el año más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz. El cese bilateral al fuego del 31 de diciembre no está teniendo grandes efectos en las regiones visitadas, los grupos armados siguen utilizando diferentes maneras de violencia y extorsión para secuestrar a las comunidades y mantenerlas bajo su control. El nuevo gobierno tiene buenas intenciones, pero con eso no basta y el pueblo lo sabe: se exigen acciones y atención inmediatas en los territorios en conflicto, muchos de los cuales han sido silenciados por los medios de comunicación o incluso por el propio gobierno.

Defensoras de los DDHH, pueblos indígenas y campesinos están siendo los colectivos más afectados, sufriendo a diario asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos, etc. Las mujeres están en una posición vulnerable, consideradas botín de guerra y siendo forzadas a entregar a sus hijas e hijos a grupos armados. La juventud se está uniendo a grupos armados por falta de una educación digna y de oportunidades laborales.

Las elecciones departamentales de octubre pueden suponer un punto de inflexión en la política colombiana, afirmando así el cambio de mentalidad del pueblo colombiano y la certeza de querer luchar por una paz total y con garantías, libre de gobiernos corruptos financiados por el narcotráfico.

Pese a todo, el pueblo colombiano muestra una fuerza sin igual, y sigue y seguirá resistiendo hasta lograr la paz.

Gracias a toda la delegación por la acogida, el apoyo y la unión mostradas durante todo el viaje. Finalmente, no hay palabras para agradecerle a las víctimas el valor y la fortaleza emocional que mostraron para relatarnos la situación que viven día tras día, gracias, sois un ejemplo para el mundo.